

Manifiesto de profesores de la Universidad Central de Venezuela



Tiempo de lectura: 4 min.

Vie, 28/10/2016 - 16:47

No es una exageración afirmar que el país conoce la peor crisis de su historia. Nunca como en estos tiempos el pueblo venezolano se había visto sometido a condiciones de existencia tan difíciles. Los graves males que afligen a la república se manifiestan en todos los órdenes de la vida nacional y agobian implacablemente la vida de los ciudadanos. La aguda escasez de bienes esenciales, en particular alimentos y medicinas no solo ha significado una precarización de la existencia individual y

social, sino que es la causa directa de inenarrable sufrimiento y muerte. La inflación más alta del mundo ha pulverizado la capacidad adquisitiva de sueldos y salarios haciendo más pobres a los que ya lo eran y empobreciendo a amplias capas de la sociedad, entre ellas a los estratos profesionales a que pertenecen los profesores universitarios. El desempleo afecta a la quinta parte de la población laboral y el subempleo y la informalidad a más de la mitad de la restante. El sistema productivo nacional ha sido conducido al colapso, mientras que las importaciones, que otrora compensaban artificialmente la insuficiencia inducida del aparato económico, no bastan para asegurar la subsistencia de la población. La inseguridad reina por doquier como consecuencia de la ineptitud gubernamental para poner en práctica políticas que ataquen las causas estructurales del delito y permitan sancionar ejemplarmente a los delincuentes con arreglo a las leyes vigentes. En lugar de ello, el sistema judicial ha sido convertido en una burocracia ineficiente y venal cooptada al servicio del régimen político. La corrupción, flagelo histórico, ha alcanzado niveles astronómicos a la vera del aparato estatal arruinando el país al paso que creaba una nueva y desmesuradamente rica oligarquía.

En el proceso de deterioro institucional y envilecimiento moral que la corrupción ha producido han desempeñado un papel protagónico organizaciones que, como las fuerzas armadas y otros instrumentos del poder público tenían por misión combatirla y no sucumbir a ella. El discurso oficial exalta la violencia como garantía de conservación del poder político y niega el derecho democrático a disentir, judicializando las legítimas y pacíficas protestas y descalificando a quienes se le oponen, creando una policía política que se ocupa de perseguirlos con saña, pretendiendo intimidarlos, sometiénolos a tratos crueles y degradantes y condenánolos a injustas penas por medio de procesos fraudulentos y violatorios de los derechos humanos, indignos de ser denominados legales. Sobresale en la sistemática negación de todo proceder independiente el desvergonzado interés del Ejecutivo, asistido en cómplice subordinación por el Tribunal Supremo de Justicia, de someter a sus arbitrios a la Asamblea Nacional. Cuadro de inadmisibile irrespeto a la Constitución al que se suman la insólita amenaza del presidente de la República de que no habrá revocatorio ni en 2016 ni en 2017, así como la silenciosa y culpable suspensión de las elecciones regionales por un sumiso Consejo Nacional Electoral.

En el curso de las casi dos décadas de gobierno “revolucionario” las instituciones universitarias han sufrido toda suerte de agresiones, desde el estrangulamiento presupuestario hasta los ataques físicos directos contra sus bienes, así como contra

los integrantes de su comunidad, autoridades académicas y gremiales incluidas. Invocando la “inclusión”, término desvalorizado por su práctica populista y demagógica, el gobierno nacional ha implementado unas políticas para el sector universitario que lejos de asegurar condiciones para que el mayor número de estudiantes tenga acceso a estudios profesionales de calidad han significado la creación de algunas pseudouniversidades destinadas al proselitismo ideológico, privando a las verdaderas de recursos indispensables para cumplir su cometido, amenazando de extinción la carrera académica y comprometiendo gravemente el futuro del país, todo ello en un clima deliberadamente enrarecido de subestimación de la actividad intelectual, que se presenta en la avasallante propaganda oficial como una especie de veleidad “burguesa”.

La depauperación del profesorado universitario, despiadadamente conducido al umbral de una indigencia sin precedentes en el proceso general de ruina impuesto a las mayorías trabajadoras, no solo revela meridianamente los propósitos gubernamentales de liquidar toda fuente de pensamiento y actuación críticos con el objeto de apropiarse indefinidamente del poder público, sino que constituye un peligrosísimo atentado contra el presente y el porvenir de la nación.

A este dramático memorial de agravios es preciso incorporar los actos más recientes: la aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2017 en una asamblea de militantes del PSUV, eludiendo delictivamente la obligación de presentarlo ante la Asamblea Nacional; y la incalificable decisión de suspender la recepción de firmas del 20%, establecido en el artículo 72 de la Constitución para activar la convocatoria del referendo revocatorio del presidente, mediante una burda maniobra orquestada entre el imparcial CNE y varios tribunales de primera instancia penal, incompetentes en materia electoral de carácter nacional.

Convencidos de la necesidad de aspirar a un porvenir mejor, que es nuestra obligación contribuir a diseñar para las venideras generaciones de venezolanos, pero también actuando en nombre de nuestros derechos presentes constantemente vulnerados por un régimen inicuo y excluyente, nosotros, profesores de la Universidad Central de Venezuela, nos movilizaremos activamente para reclamar el derecho al voto cercenado y para acompañar de modo solidario a la Asamblea Nacional en su lucha por recuperar la verdadera democracia para Venezuela.

Absalon Méndez

Adicea Castillo

Alberto Lovera

Alexis Méndez

Alexis Ramos

Alexis Mendoza

Amalio Belmonte

Amelia Carrasco

Aguirtze Quintana

Alirica Suárez

Aracelis Rodríguez de Campos

Aquiles Guevara Aragort

Alejandro Riskey

Antonio París

Alix García

Angel García Banchs

siguen más firmas

Exhortamos a nuestros colegas ucevistas a respaldar el presente manifiesto. Podrán hacerlo a través de los siguientes medios: Secretaría de la APUCV (0212-6627936) + Amelia Carrasco (0414-3322493) + Elizabeth Piña (0414-1365541) + jmcadenasg@gmail.com + Luis E. Hernández (0414-2300948) + Nashla Baez (confianza.ucv@gmail.com) + navarro.tania@gmail.com + tulio.olmos@gmail.com + Eleazar Narvaez <http://www.eleazarnarvaez.blogspot.com/2016/10/manifiesto-de-profesores-d...> +

[ver PDF](#)

Copied to clipboard